



## Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia.](#)

### Usted es libre de:

**Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

### Bajo los siguientes términos:



**Atribución** — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.



**NoComercial** — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).



**SinDerivadas** — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

**No hay restricciones adicionales** — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

## **Garantía Única de Cumplimiento en los Contratos Estatales, su prescripción y la declaratoria del siniestro: Un análisis en el contexto colombiano en la última década.**

**Pilar Johanna Echeverría Ortiz<sup>1</sup>**

### **Resumen**

El propósito de este documento es establecer a través de la definición de siniestro, y la incidencia que tiene su declaratoria en la prescripción del seguro de cumplimiento también llamado como garantía única en los contratos celebrados en las entidades estatales. Para llevar a cabo este objetivo la autora retoma las características del contrato de seguro desde la óptica del derecho privado, planteando la observancia de la normatividad que regula la contratación estatal en el acápite del régimen de garantías plasmado en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Seguidamente, valida lo correspondiente al siniestro sin dejar de lado las diferentes opciones de cobro con las que cuentan las entidades del estado para recibir lo correspondiente al valor de la indemnización por incumplimiento cuando haya lugar. En este contexto se analiza la evolución del seguro, sus inicios hasta la actualidad, sus carencias, la facultad de declarar mediante acto administrativo el montó y el cobro del perjuicio ocasionado por el incumplimiento del contratista a la entidad del estado contratante, y de esta manera concluir que a pesar de las zonas grises que existen, el estado en ejercicio de su actividad contractual propende siempre por salvaguardar los recursos públicos.

---

<sup>1</sup>Artículo resultado de Investigación elaborado para optar por el Título de Abogado en la Universidad Católica de Colombia por parte de estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia pjecheverria54@ucatolica.edu.co. Código 2101254. Este artículo fue dirigido por la Doctora Mónica Caicedo Lozada, Docente de Derecho de Universidad católica de Colombia.

**Palabras Claves:** Entidades aseguradoras, pólizas de seguro, Colombia.

## **Abstract**

The purpose of this document is to establish through the definition of a claim, and the impact that its declaration has on the prescription of compliance insurance, also called a sole guarantee in contracts entered into in state entities. To carry out this objective, the author takes up the characteristics of the insurance contract from the point of view of private law, proposing the observance of the regulations that regulate state contracting in the section of the guarantee regime embodied in Law 80 of 1993 and its regulatory decrees. Next, it validates the corresponding to the claim without neglecting the different collection options available to state entities to receive the corresponding amount for the compensation for non-compliance when applicable. In this context, the evolution of the insurance is analyzed, its beginnings up to the present time, its deficiencies, the power to declare by means of an administrative act the assembly and the collection of the damage caused by the contractor's breach to the entity of the contracting state, and in this way conclude that despite the gray areas that exist, the state, exercising its contractual activity, always tends to safeguard public resources.

**Keywords:** Insurance entities, insurance policies, Colombia

## **Sumario**

**Introducción. 1 Fin Asegurable. 1.1 Antecedentes. 1.1.1 Personas que intervienen en el contrato de seguro. 1.1.2 El Mercado Asegurador. 1.2 Modalidad del seguro y sus garantías. 1.3 Elementos del contrato del seguro. 1.3.1 El Riesgo Asegurable. 1.3.2 La Prima. 1.3.3 Obligación Condicional del Asegurador. 2 Nociones Iniciales. 2.1 Los mecanismos de cobertura de riesgo. 2.1.1 La suficiencia de las garantías. 2.1.2 Excepciones al otorgamiento de las garantías. 2.1.3 La efectividad de la garantía de cumplimiento en el Decreto 1510 de 2013. 3 El Siniestro. 3.1 El siniestro en el Seguro de Cumplimiento. 3.1.1 Legalidad. 4 La Prescripción. 4.1 La prescripción y el acto administrativo. Conclusiones. Referencias.**

## **Introducción**

De acuerdo con lo propuesto se establece, como la ocurrencia del siniestro y el momento de su declaratoria a través del acto administrativo que deja en firme el incumplimiento del contratista que este presenta deficiencias que llevan a declarar la prescripción del seguro de cumplimiento que se suscribe entre las partes. A partir de la recopilación de conceptos generales y llevados a la especificidad de la normatividad estatal se logra colegir la aplicación de la contratación pública al contrato de seguro de cumplimiento.

Para el desarrollo de problema que se plantea, se utilizó la doctrina específica sobre el tema, la normatividad y la jurisprudencia actualizadas, con el fin de generar un soporte investigativo más sólido y acorde con la actualidad de la temática en Colombia. Las personas naturales y jurídicas, a partir de la posibilidad que ostenta de enajenar y disponer de terrenos, refiere la propiedad privada como un derecho fundamental y social de todo habitante, quien ha encontrado diferentes maneras de mantener a salvo sus derechos y patrimonio, como lo es, la posibilidad de tener una serie de garantías que favorezcan o protejan todo aquello que compone su bienestar de modo general, mismas garantías que se encuentran en el surgimiento de las entidades bancarias y aseguradoras, ultimas que pretenden brindar seguridad a sus clientes frente a la protección de un tercero para salvaguardar bienes y servicios mediante la celebración de contratos de seguros, los cuales para su efectividad, deben observar determinados fundamentos o postulados pactados para así exigir su debido cumplimiento.

Por lo anterior, las regulaciones brindadas por el Gobierno Nacional frente a la actividad de dichas entidades aseguradoras en Colombia, pueden resultar insuficientes ante la normatividad internacional desarrollada para el ejercicio de esta temática, ya que al no tener una clara y

suficiente regulación a nivel nacional, permite a las entidades, a fin de hacer ventajoso su beneficio contractual, el establecer terminología confusa e incluso fuera de ley como lo es el exponer términos de prescripción que no atienden a la realidad normativa, aún cuando ya mencionamos y es bien sabido por las mismas, la imposibilidad y lo contrario a derecho que significa tal actuar. En este marco el trabajo se presenta en cuatro importantes componentes i) Fin Asegurable ii) Nociones Iniciales. iii) El Siniestro. iv) La Prescripción. v) La prescripción y el acto administrativo. vi) Conclusiones. Referencias.

### **Planteamiento del problema**

La preminencia de este artículo se enfoca en la ausencia de estudios estructurados desde la doctrina colombiana acerca de la prescripción, la declaratoria del siniestro y la efectividad de la garantía de única de cumplimiento en la contratación estatal. Los estudios existentes no se concretan en la especificidad de las cláusulas de garantías y dejan totalmente relegado el tema de los siniestros en las pólizas de cumplimiento.

A lo mencionado debemos resaltar que la congestión y los excesivos tiempos de respuesta de la jurisdicción contencioso administrativa el Consejo de Estado no ha resuelto controversias en la normativa actual, es por ello que realizar una profundización de los fundamentos que versan sobre la potestad de la administración para declarar siniestros es una acción innovadora para la comunidad jurídico - académica

Las garantías que se presenten ante las entidades estatales incluirán la póliza de seguro emitida por la compañía de seguros conforme a ley colombiana y en general en otros mecanismos de cobertura de riesgos autorizados por normativa a tal efecto.

Anteriormente, la Ley 80 de 1993 contemplaba que el contratista debía prestar garantía única que asegurara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato al igual que los proponentes debían prestar garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos, dicho aspecto fue reglamentado por el Decreto 679 de 1994, el cual estableció que dentro de la garantía única de cumplimiento debían ampararse los riesgos relacionados con el anticipo o pago anticipado; el cumplimiento; los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; la estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio y al correcto funcionamiento de los equipos.

El problema surge en vista de que, se encuentran casos en donde entidades estatales han declarado unilateralmente la ocurrencia del siniestro y el Consejo de Estado ha considerado que dichas entidades cuentan con la potestad de expedir los actos administrativos y a través de esta declaratoria hacer efectivas las pólizas en virtud de lo dispuesto, para ese momento en el artículo 68.4. del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

Por lo anterior ¿en qué medida es pertinente afirmar que existe un vacío jurídico en la normatividad en materia de contratación estatal en lo referente a la declaratoria del siniestro y su prescripción a través del acto administrativo en el contexto colombiano?

## **1. Fin Asegurable**

Para proteger daños presentados en bienes, se habla del seguro de fianza, el cual, dentro del mercado colombiano se conoce como seguro de cumplimiento, y a la vez ha tenido una participación cada vez más significativa en el territorio nacional, así lo demuestran las cifras presentadas por la Federación de Aseguradores colombianos (Fasecolda) para el 31 de diciembre de 2017, donde Nájera & Duran (2017) mencionan que, las primas para el año en cita fueron de 4.359 millones de pesos, esto representa el 29% en relación con el ramo de daños y de siniestros

que son efectivamente pagados y que, representa un valor de 2.636 millones, con una participación de aproximadamente 11% frente a los siniestros cubiertos.

De esta manera, a partir de la Ley 80 (1993) y sus decretos reglamentarios, la constitución de pólizas de cumplimiento para los contratos estatales, toma gran importancia de cara a todo lo referente a la contratación con el Estado. Por ello, en palabras Hernán Corral de como la manifestación de la relación institucional existente entre el seguro y la responsabilidad aplicable a la actividad aseguradora, prima el deber de funcionar en pro de la indemnidad del patrimonio asegurado y la protección del derecho de la víctima o contratante de obtener una íntegra y oportuna reparación de aquello por lo cual pago una póliza asegurable. Corral (2015)

Es por tanto menester recordar que, el mercado de las entidades aseguradoras, ha captado grandes sumas de dinero por concepto de primas, de allí que, su importancia en la protección del patrimonio público y que es protagonista no solo desde el punto de vista económico sino también desde el jurídico. Ahora, podemos referir que, si bien actualmente existen múltiples opiniones de los expertos frente al tema, a luz de su aplicabilidad, se evidencian escasas conclusiones jurídicas que favorezcan más a las entidades estatales que al sector asegurador.

## **1.1 Antecedentes**

Desde tiempos remotos, es posible evidenciar la existencia de una latente necesidad, como la es aquella de conformar una agrupación de personas con el fin de asistencia mutua y distribución de los riesgos entendidos como un fenómeno normal de la humanidad. Sobre tal supuesto, siguiendo lo expuesto por Donati (1993, citado por Penagos, 2005) como punto de partida se encuentra la familia, entendida como clan y tribu que se conforman de manera natural y posteriormente, dar paso a lo que es denominado como organización estatal que asocia a un



fenómeno de voluntarios y que, según este autor, se encuentra en la India, en Persia, Palestina y Fenicia, así como también se presume que hay referencia en el Talmud y en el Código de Hammurabi.

Sin embargo, hay que resaltar, en palabras de González (2015) como desde finales del siglo XVIII, dos profesores destacados promovieron una herramienta con la que, ante necesidad del Estado Prusiano, se pretendió la promoción de intercambio a fin de proteger a los comerciantes en relación con el impago de las cuentas que tenían por cobrar a cargo de sus correspondientes cobradores. Siendo así, como de dicha manera surge la primera modalidad de organización aseguradora, en la cual se salvaguardarán los bienes de las personas a cambio de una retribución económica para tal fin.

A lo largo de los últimos años, las entidades aseguradoras han sido objeto de grandes transformaciones a causa del crecimiento acelerado que ha figurado en ellas, llevándolas a constituirse como pilares del sistema financiero, dichos cambios parten de la preocupación de los ciudadanos en aspectos que refieren bienestar y estabilidad, como lo es el jubilarse, incrementando así la demanda de seguros de renta vitalicia, y la necesidad de conocer la cultura financiera como potenciales inversores, causando una provisión de servicios más receptivos y sofisticados (Azofra & Castrillo, 2013)

Lo anterior, encuentra fundamento en el Decreto 410 de 1971, actual código de comercio de Colombia, pues a partir del artículo 1036 y subsiguientes regula la figura del contrato de seguro, así pues, la ley comercial enuncia además de los elementos esenciales, el tener como partes el asegurador, siendo la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada y con arreglo a la normatividad, y como tomador, la persona que por cuenta propia traslada los riesgos, siendo así, claro para el presente, que el estado hará las veces de asegurador.

Mismo decreto en cita que define como riesgo, en su artículo 1054, aquel suceso incierto que no depende de la voluntad del tomador y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. En donde los hechos inciertos o extraños al contrato de seguros, ni la incertidumbre subjetiva, serán riesgo aplicable. Así mismo, define la garantía como la promesa con la cual el asegurado se obliga a hacer o no hacer determinada cosa, y el siniestro, como la materialización del daño asegurado.

Menester resulta enunciar la modificación al Código de Comercio, siendo el decreto en comento, por la Ley 45 (1990) que en su artículo 83 establece como oportunidad para el pago de la indemnización, el deber de efectuarlo dentro del mes siguiente a la materialización del siniestro asegurado, mismo que debe ser acreditado aún extrajudicialmente, para que vencido dicho termino, sea reconocido y pago al beneficiario incluyendo el interés moratorio. Siendo claro el termino para el pago, sin que por acuerdo de partes pueda ser inferior o pretender prescripción alguna que evada tal disposición legal.

No obstante, vale la pena señalar que acorde a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil (1994) expediente 4045, según el negocio, ya sea bilateral, oneroso, aleatorio o de tracto sucesivo tendrá un asegurador que lo obliga a hacerse cargo de una prima debido a posibles riesgos que han contemplado y que deba cubrir o indemnizar los a daños sufridos. También se afirma en este expediente la existencia de elementos de suma importancia que se encuentran relacionados con el esquema contractual al ser una obligación condicional contraída que tiene el asegurador, pues es su responsabilidad cubrir la prestación prometida en caso que haya un riesgo asegurado.

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de lograr el acercamiento y la comprensión de la problemática, es pertinente abordar algunos aspectos fundamentales del contrato de seguro, como lo son sus características, personas que intervienen en él y los elementos esenciales que lo conforman, y a su vez, comprender que en caso de que ocurra el siniestro el asegurador debe asumirlo y el asegurado debe cubrir algunas contraprestaciones, como es el pago de la prima.

Debido a ello, surgen algunas posturas desde el derecho de seguros, que, según lo expuesto por Londoño, Muñoz & Hincapié (2014, p. 3) deben referir clara comprensión en los elementos que estructuran la garantía y la relación entre las partes de la misma, así como la finalidad que se persigue contractualmente para que se efectué lo allí plasmado y prevalezca el interés de la víctima en el acceso a la indemnización.

Con ello, es dable entender que los derechos en los seguros son tan importantes como los deberes que estos tienen, enmarcándose bajo unos elementos jurídicos que respaldan tanto al asegurado como al asegurador. Sin embargo, en el Código de Comercio Colombiano se consagra como definición del mismo, el ser un contrato “consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva” (Decreto 410, 1971, p. 109), siendo estas características las que revisten de vital importancia a la hora de identificar el contrato de seguro como ya se ha hecho plena mención.

También se debe resaltar que, en relación a la definición de lo que hace referencia a un contrato real, solemne y consensual el Código Civil (1887, p. 206) en su artículo 1500 establece que, el contrato será real cuando para su perfeccionamiento se requiera la tradición de la cosa sobre la cual versa, será solemne cuando debe cumplir ciertas formalidades de modo que sin ellas

no produciría efecto civil alguno, y consensual, cuando solo requiere el consentimiento para su perfeccionamiento.

De tal modo, es posible diferenciar las formas de contrato de seguro que se pueden llevar a cabo a fin de atender a las necesidades y a los requisitos jurídicos impuestos, debiendo ser pertinentes y coherentes. Ahora bien, a tenor de lo dispuesto en materia civil el artículo 1496 del Código Civil (1887) menciona: “el contrato será unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente” (p. 206).

Teniendo en cuenta que el objetivo de este escrito es la materialización del riesgo conocida como siniestro en el seguro de cumplimiento-garantía única, es importante mencionar las diferencias en algunas de sus características y las particularidades de otros tipos de contrato de seguros ya que algunos de estos tienen importante relevancia en el siniestro, su ocurrencia y la prescripción a la hora de hacer válida la indemnización.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la diferencia entre contrato gratuito y oneroso, que según el Código Civil (1887) son definidos como “gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen” y oneroso, “cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro” (p. 360).

Otro tipo de contrato en materia de seguros, de acuerdo con Donati (1993) atiende a una calificación aleatoria puesto que las prestaciones de uno de los contratantes no guarda ninguna relación de equivalencia respecto al otro, ello, en consideración a que está sometida por prestaciones que demuestran una incierta ocurrencia en tiempo futuro, y que se programa de acuerdo con hechos que pueden suceder, no obstante en caso de que sucediera mostraría una

posible desproporción de forma notoria en cuanto a la carga prestacional, ya que esta resultan a cargo de las partes del contrato de seguro.

“Tal y como lo menciona Alarcón (2010) el contrato estatal tiene diversos elementos que lo caracterizan, como lo son: el objeto del contrato, lo cual significa, la razón de ser de éste que son los servicios públicos y las obras, cuya prestación y realización componen los fines de la Administración, y por otro lado, la colaboración de la entidad en ejercicio de la función del estado; de esta manera, se puede concretar con estos elementos, que el contrato estatal se refiere a la declaración bilateral o de voluntad común, autora de derivaciones jurídicas entre dos personas que pueden ser de carácter natural o jurídico, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa.”

Alarcón, H. (2010). Contratación estatal comparada con argentina. *Novum Jus*, 4 (1), 205-236.

Es importante considerar que, aún cuando las características anteriormente mencionadas han sido expresamente establecidas por la ley, la naturaleza misma del contrato de seguro permite identificar otras que son propias de este tipo de contrato. En ese orden, otro contrato a tener en cuenta es aquel que ostenta el carácter de ejecución sucesiva, pues hace referencia a las obligaciones a cargo de los contratantes y que no se agotan al suscribirse determinado contrato, (Donati, 1993, p. 12) menciona al respecto que, durante la vigencia del contrato de seguro se mantienen diversas obligaciones y de manera especial en cabeza del tomador, últimas que se van desarrollando en el transcurso de tiempo.

Cabe resaltar, que el seguro tiene como objetivo el indemnizar una pérdida que sea de carácter patrimonial, que sea real y en el que en el caso de que sea un seguro de daños, operare bajo principios indemnizatorios, cabe mencionar que, en ocasiones se pueden presentar algunas controversias por los seguros de personas y más que todo en seguros de vida, siendo ajenos a este tipo de concepto (Bustamante & Uribe, 1996).

Seguidamente, es menester destacar, según Bustamante & Uribe (1996): como “el contrato de seguro es considerado intuitu personae” (p. 14), dependiendo a su vez de unas condiciones personales que debe tener quien lo solicita, entre las cuales mencionan estos autores, como determinantes para la aceptación de solicitud de seguro, las siguientes:

- El grado de escolaridad.
- La formación personal de quien pretende tomar el seguro.
- El historial de siniestros ocurridos con anterioridad, de haberlos.
- La cultura y las tradiciones de la persona.

Así, al momento de configurarse como cláusulas o aspectos que, de no atender a la relación contractual, la aseguradora no puede hacerse cargo de ello. Por lo que se presumen como un elemento de tipo decisivo para la formación de la correspondiente carga, con el consentimiento. Con relación en eso, Bustamante & Uribe (1996, p. 14) dicen que no se debe pretender exigir circunstancias irrelevantes en lo que atañe a la voluntad que los llevo a contratar y el objeto sobre el cual determinaron dicha relación contractual.

Por último, hay que tener en cuenta que, el seguro tiene unas bases como cualquier otro negocio, bases que radican en los principios de buena fe y en la presunción de la ausencia de una intención dolosa así como del ánimo de no defraudar al asegurado, en este caso, dentro de un contrato de seguro, el hablar de buena fé, en comparación con otros aspectos jurídicos, es mucho más amplia y tiene repercusiones de forma sustancial (Curra, 1966), debido a lo anterior, es pertinente exponer lo dicho por Cima (2013, p. 280) quien afirma que, la garantía que efectúa el asegurado puede compararse como el llamamiento en garantía de terceros que se hace dentro de un proceso, salvo que en las disposiciones legales atinente a los seguros, existe un régimen

particular frente a las actitudes procesales que puede asumir la aseguradora llamada en garantía que difiere de lo establecido de la comparación precedente.

El Contrato de Seguros según las particularidades de la contratación estatal establece en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, la pertinencia y obligatoriedad de preservar el erario público y el interés general que prima sobre el interés particular. De igual forma el legislador fue contundente en mencionar que en los contratos de seguro de cumplimiento contratados en favor del estado las pólizas no expiran por falta de pago, lo cual difiere en lo que ocurre en la contratación entre particulares.

Por su parte la ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (Congreso de la república, 2011), el objetivo principal de esta ley se centra en dar respuesta a los vacíos en el tema de corrupción, esencialmente en lo concerniente con la contratación estatal, orientándose a fortalecer la prevención, la investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Es así como se establecen medidas administrativas, penales, disciplinarias en la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, las garantías que deben constituirse frente a los contratos estatales, esta ley se ha visto expuesta a la implementación de regulaciones que buscan la eficiencia y la efectividad de los amparos que constituyen las garantías siendo tanto el siniestro como la prescripción. Pues pese a existir un acuerdo de voluntades como acuerdo de partes, si bien se asume que el cliente traslada el riesgo pagando determinada suma de dinero, la entidad aseguradora debe responder

por la indemnización en el acaecimiento del riesgo contemplado, sea siniestro o pérdida acorde a los términos contractuales fijados.

### **1.1.1 Personas que intervienen en el contrato de seguro.**

Según (Superintendencia financiera de Colombia, 2019): “Las partes del contrato de seguro están definidas claramente en el artículo 1037 del Código de Comercio, siendo solamente el tomador y el asegurador quienes poseen esta calidad” (párr. 2). Es por ello, que en primera instancia se tiene al asegurador, considerado como aquella persona que tiene una condición jurídica y que asume algunos riesgos, por tanto en estas condiciones, debe tenerse una empresa constituida según lo correspondiente como una sociedad anónima o según lo denominado como cooperativa de seguros, que debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ahora bien, adicional a esto, debe tener un permiso de la superintendencia financiera de Colombia para su debido ejercicio, siendo con esta autorización que entrara a cumplir su fin propuesto (Superintendencia financiera de Colombia, 2019).

En segundo lugar, se tiene al tomador que, según el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971, p. 317) se refiere a la persona que, por cuenta propia o incluso ajena, es decir, en representación de alguien, traslada los riesgos. Es preciso mencionar, que esta parte puede ser una persona natural o una jurídica, no obstante, generalmente quienes lo hacen son las personas naturales al tener de manera más clara e inherente las calidades de tomar y disponer de sus derechos como el asegurarlos (Superintendencia financiera de Colombia, 2019).

También es importante subrayar el papel del asegurado, haciendo especial énfasis en los seguros de daños pues se considera el ser la persona cuyo patrimonio puede verse afectado de manera directa o indirecta por la realización de un riesgo (Código de Comercio, 1971, p. 272),



por lo que puede definirse como el titular del interés asegurable y que cumpliendo con lo lícito, puede ser susceptible de estimación monetaria. Ahora bien, respecto a los seguros de personas, estas son aseguradas en donde la vida o la integridad corporal son contratadas por el seguro (Superintendencia financiera de Colombia, 2019).

Un punto clave, y que no se puede dejar por fuera, es el papel del beneficiario, quien ostenta el derecho a recibir la prestación de lo asegurado, pudiendo ser el tomador o el asegurado e incluso una persona diferente a estos dos, pero, para que así suceda, debe determinarse con claridad en la póliza conforme al artículo 1142 del Código de Comercio, ya que en el evento de no haber claridad o determinación puntual, recibirán la calidad de beneficiario el cónyuge del asegurado, recibiendo la mitad de aquello que corresponde, y la otra mitad, será asignada a los herederos (Superintendencia financiera de Colombia, 2019).

### **1.1.2 El Mercado Asegurador**

De otro lado, debemos establecer lo referente al término “*mercado asegurador*” el cual refiere diferentes formas económicas y que a su vez cuenta con un potencial en relación con el desarrollo económico. Por esta razón, existen políticas y normas que se deben tener en cuenta en estos procesos, para ello González & Suarez (2013), dicen que hoy en día aún continúan algunas prácticas, ciertas nomenclaturas y diferentes competencias regidas por organismos que administran estas aseguradoras privadas y gracias a ello no se genera suficiente incentivos como entidad de dicha naturaleza.

Así mismo, son prácticas que continúan y que en ocasiones no generan garantías sustentables que muestren acciones que beneficien a ambas partes y donde el interés sea integrado. De esta manera, es como se llega a la consideración bajo este ámbito, en cuanto a que la elección de

garantías es definida según Ocaña (2015, p. 4), como aquella ejecución comercial o acelerada en donde la acción legal, corresponde por activa al titular del derecho real de la garantía, para hacer efectiva la venta del bien a causa del incumplimiento de la obligación garantizada, generando un título de ejecución que contiene la garantía y el estado de cuenta del deudor.

De igual forma, cabe agregar que según González & Suarez (2013, p. 4), hablar de la ejecución de garantías se hace en relación con que el seguro tiende a guardar una relación con lo bilateral, y a su vez con los diferentes avances a los que favorece, así como a los diferentes impulsos el cual le obligan a tener ciertos procesos de evolución y mejora, esto para tener una incidencia en la economía del país, buscando un favorecimiento en cuanto a lo económico y a lo social. Entre estas formas, se consideran las siguientes:

- Propender por la inversión de fondos ajenos.
- Capitalizar el coste de seguro e invertir en la economía nacional a proyecto de largo plazo, entendiéndose como instrumento de fomento y captación de ahorro.
- Impulsar el ahorro como competencia directa con los instrumentos financieros al gozar de duración y estabilidad.

## **1.2 Modalidad del seguro en la contratación estatal**

Existen varios tipos de seguros actualmente, ya sea de libre inversión, vehículos, seguros hipotecarios, seguros de vida, seguros laborales y seguros de salud entre otros, sin embargo, hay que considerar también que, al hablar de seguros, actualmente, sus garantías dan paso a entender que la noción de seguro atiende a la modalidad de crédito y la garantía, a un primer requerimiento, por lo cual se contemplan como privilegiados ya que las garantías personales, son un ejemplo del dinamismo en el derecho mercantil, puesto que atienden a las necesidades del

tráfico económico y de los empresarios a una escala más que actual, atinada a la realidad comercial (Angulo, Camacho, & Hoyos, 2015, p.18)

En este sentido, es preciso mencionar el accionar de la Ley 1150 de 2007, la cual modifica parcialmente la Ley 80 de 1993, la cual menciona que los contratantes deben generar garantías de la prestación de sus servicios, tal como se expone en su artículo 7:

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales. El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los contratos, así como los casos en que, por las características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.

Ahora bien, hay que considerar inicialmente que el seguro se asume muchas veces como una herramienta de protección de pagos o amortización hipotecaria. En éste tipo de seguro, Montoro (2014) manifiesta el ser uno de los últimos y novedosos inventos que tiene la banca, esto con la finalidad de garantizar los pagos de las cuotas hipotecarias de sus clientes en la ocurrencia de un hecho no previsto, enfocado hacia una concepción de seguro con una prima única que protege al tomador quien contrata un préstamo de tipo hipotecario ya sea por fallecimiento, por incapacidad o desempleo en lo que dura el préstamo que el banco le ha otorgado. Es por esta razón, que no

todas las aseguradoras asumen una cobertura total, puesto que ofrecen no solo la contratación del seguro de vida, sino el pago de una prima adicional (p. 40).

Para el caso que nos ocupa, la garantía única deberá avalar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y estará vigente durante la duración del contrato y su respectiva etapa de liquidación. De la misma manera todos los proponentes constituirán garantía de seriedad de la oferta. Las mencionadas garantías serán pólizas emitidas por compañías de seguros debidamente constituidas para operar en Colombia o podrán presentar garantías bancarias.

Al observar con detenimiento, el articulado lo que se busco fue ampliar el abanico de posibilidades que tiene el contratista para constituir las garantías exigidas en favor de la entidad estatal, y a su vez autoriza al gobierno nacional para ejercer la potestad reglamentaria que le permita implementar otros mecanismos de cobertura diferentes a las pólizas de seguro de cumplimiento-garantía única y garantías bancarias. Es así como la complejidad de las garantías en la contratación con el estado pasó a ser competencia del gobierno toda vez que pese a las modificaciones implementadas en el año 2007 no reflejan la realidad normativa que exige el tema.

Mediante la puesta en marcha del Decreto 734 de 2012, se expresa mediante el numeral 5.1.3 que los contratistas podrán otorgar únicamente como medidas de riesgo: 1. Póliza de seguros; 2. Fiducia mercantil en garantía; 3. Garantía bancaria a primer requerimiento; 4. Endoso en garantía de títulos valores y 5. Depósito de dinero en garantía.

Sin embargo, el Decreto 1510 de 2013 en su artículo 111 menciona lo siguiente: Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus

obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza; 2. Patrimonio autónomo y 3. Garantía Bancaria.

Es por esta razón, que en la última década se han venido planteando discusiones en torno a la determinación de la naturaleza jurídica del seguro de crédito, y que en cierta forma no tiene relación con los seguros convencionales pues lo relacionado con el concepto autónomo en las operaciones financiera y además con las de los seguros, no pertenecen a esas categorías (González, 2015). Por tanto, doctrinantes y pronunciamientos judiciales dejan ver una división de corrientes en la que por una parte se predica una acción directa del perjudicado contra el asegurador, frente a aquella que atiende a un mecanismo de legitimación como el llamamiento en garantía para hacer efectivo el cumplimiento de carga que se encuentra en cabeza de tal llamado (Corral, 2015, p. 42).

Según lo expuesto, no cabe duda de que el seguro de crédito es considerado como una garantía que permite a los bancos respaldar los créditos que conceden, siendo claro el encuadrar el elemento de garantía y de riesgo en su ejercicio contractual como parte de dicha relación.

### **1.3 Elementos del contrato del seguro**

Los elementos del contrato del seguro, son fundamentales para entender que respalda y que no, así como para determinar que se tiene en cuenta, por ello, según el artículo 1045 del Código de Comercio (1971, p. 260), determina los siguientes elementos esenciales:

1o) El interés asegurable.

2o) El riesgo asegurable.

3o) La prima o precio del seguro, y

4o) La obligación condicional del asegurador.

En donde el defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno.

### **1.3.1 El Riesgo Asegurable.**

A tenor de lo dispuesto en el artículo 1054 del Código de Comercio, (Decreto 410, 1971, p. 316) se ha establecido que el riesgo debe entenderse como aquel suceso incierto o desconocido que no depende de la voluntad del asegurado o beneficiario, y que, una vez ocurrido, da lugar al cumplimiento de la obligación en cabeza del asegurador, por lo anterior, es necesario decir que, (Rodríguez, 2017, p. 3) existen hechos inciertos, que en la realidad son más que poco probables, imposibles en la realidad y por tal motivo no configuran riesgo, por tanto, no interesan al contrato de seguros. Concluyendo que no se configura el riesgo ante la incertidumbre subjetiva, con ocasión a un hecho determinado, que pudiese haberse tenido o no por el cumplimiento. Es decir que debe ser cierto y materializado sin dolo para dar paso al cumplimiento de lo pactado.

### **1.3.2 La Prima**

La prima puede ser definida como valor del contrato de seguro, es decir, es el precio que el asegurado debe pagar a la aseguradora con ocasión al riesgo que esta última está asumiendo, teniéndose ello como una contraprestación (Superintendencia financiera colombiana, 2019). Lo cual significa que la prima emerge como resultado de la aplicación de una tarifa, la cual se calcula dependiendo de la probabilidad que tiene de ocurrir un siniestro, así como del valor del objeto que se pretende asegurar, verbigracia, un vehículo, un inmueble.

De acuerdo con lo que ha venido expresando la Superintendencia Financiera Colombiana (2019), es necesario traer a colación que, suele ocurrir con frecuencia la confusión de la prima

como uno de los elementos esenciales al contrato de seguro, otrora, el legislador ha mencionado que la prima debe pactarse al interior del contrato, lo cual indica que no es expresamente necesario su pago (p. 1). Debe indicarse que, el pago de prima varía dependiendo de la voluntad de las partes y modalidad del contrato, verbigracia, puede pagarse a plazos o cuotas, también con la intervención de otras compañías crediticias en donde se adoptan modelos de financiación, teniendo en cuenta lo estipulado por el artículo 1069 del Código de Comercio (1971, p. 319),

De igual forma, es preciso mencionar lo expuesto en el artículo 1066 del Código de Comercio (1971), subrogado por el artículo 81 de la Ley 45 de 1990, quedando de la siguiente manera:

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella (p. 267).

Según lo establecido por Narváez (2015):

(...) no hay un verdadero desequilibrio en las prestaciones entre tomador y asegurador, por cuanto el nivel de la prima refleja el grado de exposición de los riesgos que asume la aseguradora y que, no se trata de una exigencia probatoria injustificada, por cuanto lo que pretende es evitar que las compañías de seguros asuman pérdidas derivadas de operaciones de crédito que resultan propios de las actividades especulativas de las entidades del sector financiero y que, por tanto conllevan una contingencia ganancia o pérdida (p. 84).

Finalmente, respecto de este punto, puede concluirse que la prima es definida por la doctrina, como una contraprestación, en donde participan dos sujetos contractuales, la entidad aseguradora y el tomador del seguro, de esta relación se generan obligaciones, dentro de las cuales está por

parte del tomador pagar el precio de la prima, y por parte de la aseguradora, hacerse cargo del riesgo que genera el objeto del contrato. En ese sentido es preciso mencionar el artículo 1068 del Código de Comercio (1971, p. 319), modificado por la Ley 45 de 1990, en que se establece:

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato (p. 268).

### **1.3.3 Obligación Condicional del Asegurador.**

La obligación del asegurado se plantea como un elemento fundamental en el contrato de seguro, pues la misma se encuentra sometida a condición, por lo que se torna necesario para que pueda configurarse y ejecutarse el contrato objeto de estudio en este documento, por tanto, este sujeto al tener deberes legales que cumplir, de no hacerlo concurriría para el efectos negativos como generar la disminución del valor de la indemnización que tiene derecho a recibir e incluso la terminación del contrato (Cajamarca Castro, 2016, p.3).

Es decir, el comportamiento que adopta el tomador del seguro acarrea un elemento esencial del contrato, porque de ello depende la configuración del mismo, de no cumplir con ello, se generan consecuencias negativas para el beneficiario al momento de hacer efectiva la póliza,

Es necesario traer a colación, que tanto por parte del asegurador así como del asegurado, sus obligaciones se encuentran estipuladas por las disposiciones del Código de Comercio (1971, p. 317) en el artículo 1061, el cual señala a su tenor que las garantías del contrato de seguro suponen dos obligaciones, las primeras conocidas como garantías de conducta que suponen la ejecución o no de determinada acción, es decir, una carga de hacer o no hacer, y las segundas, las



garantías afirmativas que buscan informar si existe determinada situación de hecho al momento de configuración del contrato (Cajamarca Castro, 2016, p. 4).

Sin embargo, en esta eventualidad se asume que, de subordinarse a que posiblemente ocurra un hecho, que sea incierto, y el cual no dependa absolutamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario, tal condición se torna riesgosa, siendo definido así por el artículo 1054 del Código de Comercio (1971, p. 315) Por lo anteriormente expuesto, se menciona que la realización de aquella situación, revela el origen de las obligaciones del asegurador (Cajamarca Castro, 2016, p. 5). De ello, es necesario decir, la obligación condicional se hace efectiva por la ocurrencia de una situación o hecho previsorio, teniendo como claro ejemplo de ello el riesgo que se genera a partir de las estipulaciones contenidas en el contrato.

De lo discurrido, respecto del seguro de cumplimiento, han surgido diferentes nociones, sin embargo, se hace necesario mencionar que esta ficción jurídica emerge con la finalidad de que si una de las partes incumple con el contrato, la otra tenga herramientas jurídicas para perseguir el cumplimiento del mismo, es decir, el fin es proteger al acreedor por la falta a las obligaciones por parte del deudor, por ello se menciona que, esta modalidad incluye el compromiso adquirido por la compañía de seguros, siendo la de indemnizar a cambio de determinada suma denominada prima, en donde los perjuicios por el incumplimiento, se derivan de la ley o contrato (Robledo, 2015, p. 41).

Por otra parte, el Código de Comercio (1971, p. 322) en su artículo 1081 con relación en el tema de la prescripción de la acción en lo atinente al contrato de seguro, de la siguiente manera, lo primero es que se debe señalar que la prescripción puede ser ordinaria, ésta según lo establecido por el ya citado artículo es de dos (2) años, la particularidad que surge de ella es que,

comienza a correr al momento en que quien debiese iniciar la acción tuvo conocimiento de los hechos que dan origen a la misma, verbigracia, María era beneficiaria del contrato de seguro de vida celebrado por Juan, y este murió, desde el momento en que María tuvo conocimiento que Juan murió y ella es beneficiaria del seguro, tendrá dos años para iniciar la acción ante la jurisdicción ordinaria civil.

En el mismo artículo 1081 del Código de Comercio (1971, p. 322), se señala otro tipo de prescripción, la denominada extraordinaria, el término para interponer la acción en esta eventualidad es de cinco (5) años y corren desde el momento en que surge el nacimiento del derecho, es necesario destacar que, los términos estipulados por el legislador para la prescripción no pueden modificarse contractualmente.

## **2. Nociones Iniciales**

### **2.1 Los mecanismos de cobertura de riesgo**

Frente a los mecanismos de cobertura del riesgo, es necesario mencionar que la Ley 1150 de 2007, que establece las herramientas o instrumentos que garantizan el cumplimiento de la póliza de seguro, así mismo de la eliminación de endosos que cumplen el papel de garantías admisibles<sup>2</sup>. En ese sentido, es preciso mencionar lo establecido en el artículo 1046 del Código de Comercio (1971), modificado por la Ley 389 de 1997, el cual expresa lo siguiente:

Con fines exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el

---

<sup>2</sup> La normatividad vigente establece que uno de estos es la póliza de cumplimiento-garantía única la cual debe contener los siguientes elementos esenciales: generalidades del contrato de seguro e identificación de los intervinientes.

documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. La Superintendencia Bancaria señalará los ramos y la clase de contratos que se redacten en idioma extranjero (p. 260).

Sin embargo, se encuentra el Decreto Ley 633 de 1993 el cual menciona en su artículo 184 numeral 2, en lo relacionado con los requisitos de las pólizas, las cuales deberán seguir las siguientes exigencias:

- a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva;
- b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y
- c. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza.

### **2.1.1 La suficiencia de las garantías.**

Aquí vale la pena considerar que la suficiencia de las garantías se soporta en el cumplimiento de la entidad aseguradora. Por ende, se considera que, la libre prestación de los servicios al interior del sector específico asegurador, se genera a partir del artículo 59 del Tratado de Roma, al interior del cual se generaron inconvenientes derivados de las estipulaciones legislativas que ya existían al interior de cada uno de los miembros de la organización mundial mencionada, generándose una condición poco beneficiosa para que se realizasen las acciones u operaciones

por parte de las entidades aseguradoras en el estado donde se prestarían los servicios (García, 2013, p. 1178)

Por otra parte, una de las problemáticas que surgen a partir de la situación descrita en párrafos anteriores, es la posibilidad que existe para quien toma un seguro que no se encuentra regulado o en el mercado del Estado donde este se encuentra domiciliado, ello con ocasiones las diferentes regulaciones restrictivas que se imponen al interior de estos incluyendo los controles posteriores de las autoridades (García, 2013, p. 1082). Entonces la problemática se encamina a establecer si el tomador puede o no adquirir dicho producto.

En virtud a lo anterior, las garantías de seguro son consideradas por la doctrina como negocios jurídicos en los que una parte se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato, realizando el pago llamado a proceder bastando el requerimiento que haga el beneficiario sin que puedan exponerse excepciones derivadas del contrato u oponerse frente al beneficio de excusión (García Vásquez, 2016, p. 20).

Así las cosas se trae a colación que el compromiso por los estatutos derogados en las garantías se orientan con el fin de asegurar los intereses económicos del beneficiario, que si bien puede estar perjudicado por el incumplimiento del deudor principal, se torna necesario y de vital relevancia el establecimiento de los diferentes mecanismos creados con la finalidad de dar cumplimiento a las cláusulas de garantías y que estas sean efectivas, estando obligada la aseguradora a cubrir con el riesgo en favor del beneficiario (García Vásquez, 2016)

Así, las garantías, como a bien se tienen del Concepto 2003043428 (2003) de la Superintendencia Financiera de Colombia, deben entenderse como aquel prometido ante el cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, siendo una carga en cabeza de este,

entendiéndose por tanto como un compromiso que ha de cumplir según lo estipulado en el clausulado de la póliza, de allí que se reconozca la importancia de consagrar en ella toda formalidad para ejecutar en debida forma su fin propuesto rodeando lo más posible frente al objeto o la persona asegurados esperando del tomador una conducta diligente aún cuando tiene un respaldo con dicho contrato, pues se espera con su actuar hacer más remota la ocurrencia del siniestro.

De lo cual la garantía en comento, debe cumplirse de manera rigurosa siguiendo lo que para ella se establece, pues de no cumplirse, o la promesa se incumpla, el contrato se verá afectado de nulidad relativa o incluso, darse la terminación del contrato, siendo eventos excepcionales en la ocurrencia de las circunstancias del artículo 1062 del Código de Comercio (1971, p. 318), el cual establece la excusa de no cumplimiento de la garantía, teniendo por ejemplo la violación de una ley posterior a la celebración de un contrato,

### **2.1.2 Excepciones al otorgamiento de las garantías.**

Habida cuenta de las diferentes controversias respecto del cumplimiento y no cumplimiento de garantías es importante considerar lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 toda vez que establece que éstas no serán de carácter obligatorio en aquellos contratos que versen sobre empréstitos, interadministrativos o de seguro. Ante las diversas problemáticas del cumplimiento y no cumplimiento de garantías hay que considerar lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, pues establece que estas últimas no serán obligatorias en aquellos contratos que versen sobre empréstitos, sean interadministrativos o de seguros con valor inferior al 10%. Por lo anterior, es necesario señalar que lo escrito contractualmente, es la constancia de la garantía y la formación de la identidad frente a la aplicación del reglamento ante el cual se cumple la carga en cabeza de la entidad aseguradora.

### **2.1.3 Efectividad de la garantía**

En éste apartado, hay que considerar que conforme al inciso cuarto (4) al interior del artículo séptimo (7) en la Ley 1150 de 2007, es posible que la entidad del estado mediante acto administrativo realice la declaratoria del riesgo de siniestro o accidente, sobre las garantías del cumplimiento del contrato de seguros, sin embargo, el artículo 17 de la misma establece que las sanciones contractuales deben observarse plenamente a fin de determinar la efectividad de la garantía única en caso de caducidad, estando la entidad estatal facultada para hacer efectiva la cláusula penal y determinar el monto del perjuicio llamado a pagar al contratista y aseguradora de constituirse el siniestro (Ordoñez, 2012).

Ahora bien, se puede decir que la regulación y control financiero de las aseguradoras tiene como finalidad proteger, ello desde dos prerrogativas importantes, la primera, proteger la economía del país en ocasión a que las entidades aseguradoras son de vital importancia para el desarrollo económico al nivel que sea, por lo que, si estas son afectadas, la economía también lo estará, el segundo de los puntos está encaminado de manera más delimitada, puesto que tiene que ver con la necesidad de que se cumpla con los intereses de los tomadores de seguros, así como los asegurados y beneficiarios, pues es importante que las entidades aseguradoras tengan el real compromiso de cumplir con los presupuestos contractuales por los cuales una persona paga la prima, así que es necesario que estas mismas compañías al momento que se presenten los siniestros se encuentren en condiciones económicas para sufragarlos (Contreras, 2019, p. 47).

En ese sentido, las disposiciones del Decreto 4828 de 2008 emitidas en su artículo 2, con relación en los mecanismos de cobertura del riesgo, expone lo siguiente:

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y (iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato. El mecanismo de cobertura del riesgo es por regla general indivisible, y sólo en los eventos previstos en el presente decreto, la garantía otorgada podrá ser dividida por etapas contractuales.

A partir de tales enunciados, se deben considerar aquellas medidas que permitan garantizar y asimismo proteger los diferentes derechos de los usuarios o clientes de las entidades aseguradoras, es así como la acción directa está ubicada como “uno de los medios específicos de mantenimiento de la integridad del patrimonio del deudor”, al igual que el mecanismo subrogatorio y fiscal. Es por esas razones que la acción que se ejerce de manera directa es “una de las medidas de tutela preventiva del crédito” (Vigil, 2008, p. 45). Así entonces, debe entenderse que en el mismo sentido de las acciones o medidas de conservación que rodea la garantía tanto de manera patrimonial como la misma solvencia de quien la ejerce, por ello, para que la acción revocatoria funcione, la oblicua o indirecta, junto con las medidas cautelares deben estar consensuadas (Vigil, 2008, p. 45).

Según el Decreto 1510 de 2013<sup>3</sup>, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, en su artículo 128<sup>4</sup>, la entidad estatal puede hacer efectivas las garantías previstas, así:

1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

“Adicionalmente, atendiendo a la facultad de la entidad estatal de presentar por medio del acto administrativo el incumplimiento del contrato y la materialización del riesgo, es significativo proponer que el acto administrativo se crea en el momento en que una autoridad o un particular en ejercicio de ocupaciones administrativas acoge una decisión, favoreciendo una situación jurídica; siendo así, como la categoría de acto administrativo adquiere vigencia conforme a la concepción que se posea del derecho administrativo según un enfoque del

---

<sup>3</sup> Deroga el Decreto 734 de 2012, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. Se tiene en cuenta el artículo 128 sobre efectividad de garantías y 162 sobre régimen de transición.

<sup>4</sup> Efectividad de la garantía. Artículo compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1082 de 2015.



orden funcional, en el cual la esencia es la actividad; u orgánico, en el cual la esencia es la organización del estado” (Ortega, 2018).

Se torna necesario mencionar que, la acción ejercida directamente contra el deudor, se despliega en el área del derecho de seguros para facilitar el ejercicio de la misma en contra de la entidad aseguradora, garantizando el derecho del perjudicado para obtener la reparación del daño causado, a dicha acción se le denomina como acción directa en consideración a que el tercero perjudicado recibe la calidad de beneficiario y por tanto ostenta la facultad de exigir la acción derivada del contrato de seguro sin que deba demandar previamente al causante del daño por la responsabilidad civil (Vigil, 2008, p. 47).

Para finalizar es preciso mencionar que el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. La cual recopila toda la normatividad vigente relacionada con el tema de Contratación Pública.

### **3. El Siniestro**

#### **3.1 El siniestro en el Seguro de Cumplimiento**

El Código de Comercio (1972) en su artículo 1072, lo define como: la realización del riesgo asegurado (p. 270). Partiendo de este concepto es importante mencionar los escenarios que a la luz del seguro de cumplimiento -garantía única se presenta, a fin de establecer cuando se ejerce el cumplimiento de una garantía y así determinar de manera clara la ocurrencia y cuantía del siniestro con el fin de establecer en qué punto se activa la obligación de la aseguradora y además si corresponde o no la prescripción.

Es por ello que una vez mencionado lo anterior contamos con un entorno paradójico para efectividad del cumplimiento para ello se establecen varias posibilidades a un escenario el cual afrontar en caso de incumplimientos. Bajo esta perspectiva hay que considerar que el siniestro, **primero**, cuenta con aquella facultad para buscar la declaratoria de la falta de cumplimiento del contratista, por lo anterior, si la parte se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones puede ejercitar y dar cumplimiento a la cláusula penal si se estipula, ello con la finalidad de realizar una estimación de perjuicios si se quiere de manera anticipada; **segundo**, también se pueden imponer multas al contratista, ello con la finalidad de que sea presionado y se vea obligado a cumplir con las cláusulas del contrato; **tercero**, al interior de los contratos estatales una de las facultades que se otorga a las entidades del estado es la ejecución de las cláusulas exorbitantes, mediante esta puede declararse la caducidad del contrato, así como la declaratoria del incumplimiento del contratista.

Así las cosas, entendidos estos parámetros se estima que definitivamente si se ejerce el cumplimiento del llamado siniestro, por otra parte, también puede acudir a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos si lo que se pretende es solucionar la problemática, estos pueden ser, la conciliación, el arbitramento este último debe estar estipulado mediante cláusula compromisoria, y de no poderse solucionar la eventualidad por estos medios, se podrá proceder con el cumplimiento de las garantías (Alarcón, 2010).

Según lo determinado por la Ley 1150 de 2007 en el párrafo 4 del artículo 7, establece que el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare. Contrario a lo reglamentado en la ley 80 de 1993 la norma no condiciona la ocurrencia del siniestro al acto administrativo que declaraba la caducidad del contrato, lo que hizo fue ampliar

esta facultad autorizando a la entidad estatal para que a través de acto administrativo autónomo declarara el siniestro. En otras palabras, el legislador autorizó a las entidades públicas para dejar en firme por acto administrativo explicito declarando la ocurrencia del siniestro.

Por su parte la ley 1474 de 2011, esta “nueva” reglamentación introduce reformas a sus instituciones que enriquecen aún más el abanico de normas a aplicar en este terreno, con la sanción y entrada en vigencia de esta ley se introdujeron en materia de contratación estatal, cambios orientados a prevenir actos de corrupción en ese campo de la función administrativa, que a la fecha han sido poco estudiados, no obstante, lo novedoso de algunos de ellos, como lo es el caso de la constitución de fiducias para el manejo de anticipos en los tipos de contratos señalados en la Ley, la ampliación del régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, contenido en el capítulo I de la Ley, la extensión de la responsabilidad para contratistas, consultores, interventores y asesores, la responsabilidad de los servidores públicos que omitan tomar medidas de carácter sancionatorio contractual ante el conocimiento de hechos de corrupción, la distinción que hace la norma entre interventoría y supervisión del contrato, que no han sido lo suficientemente abordados por la doctrina no obstante e reforzamiento que acarrear en materia de responsabilidades para los partícipes de la gestión contractual.

### **3.1.1. Legalidad**

Mediante la actuación administrativa ejercitada por la entidad del estado, en la cual se generan sanciones del pago al contratista, así como al asegurado correspondiente al siniestro, hay que considerar que ese acto que estipuló las multas o sanciones, es el que sirve para la reclamación ante la entidad aseguradora, siendo estas medidas de carácter declarativo o constitutivo. Sin embargo, vale la pena considerar que el acto administrativo del siniestro es mediante el cual se

consagra el incumplimiento del contrato, pues dicho siniestro no corresponde al acto sino al cumplimiento de las obligaciones reciprocas, que, en caso de ser aquellas puestas en cabeza del contratista, de no ejecutarse ocasiona la imposición de multas a este (Gómez, 2011, p. 34).

Atendiendo lo pertinente a las multas y la cláusula penal pecuniaria estas se encuentran determinadas como sanciones no resolutorias del contrato toda vez que las multas son una urgencia pecuniaria para anticiparse a los incumplimientos que no revisten gravedad por parte del contratista, diferente de la cláusula penal en contratación estatal que es un espejo de la que se encuentra reglada en el derecho civil toda vez que es de carácter sancionatorio y busca una tasación de los perjuicios.

Como lo mencionó la ley 1474 de 2011 en su artículo 86 *“Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal”* (Congreso de Colombia, 2011).

### **3.1.2 Posturas jurisprudenciales.**

En este punto se evidencia que desde la información adquirida y acción en dónde el acto administrativo pierde eficacia y validez, se evidencia que, en cuanto a contratos estatales, la caducidad no constituye el siniestro para el cumplimiento de lo contratado (Azofra & Castrillo, 2013, p. 53).

En sentencia de Tutela 769 (2015) la Corte Constitucional con ponencia de Jorge Ignacio Pretal Chaljub, es enfática al enunciar que, La póliza de cumplimiento, tiene como objetivo

proteger al asegurado, de las sanciones o perjuicios que se deriven de un incumplimiento contractual.

Así mismo, el Consejo de Estado en Sentencia 00239 (2018) consejera ponente: María Elizabeth García González, establece que, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros puede ser extraordinaria, siendo de cinco años, contados a partir del nacimiento o surgimiento del derecho, también será ordinaria, con un término de dos años contados a partir de la fecha de conocimiento del hecho base de acción. Añade, que, a tenor de lo dispuesto en el Código de lo Contencioso Administrativo, cuando se constituye una garantía en favor de una entidad pública, es clave la declaración del incumplimiento ya que una vez ejecutoriado y con la póliza, prestaran merito ejecutivo.

Esta misma corporación, mediante sentencia del 20 de agosto de 1998, retornando lo indicado a su vez en sentencia del 14 de diciembre de 1992, Consejero Ponente: Yesid Rojas Serrano, hace referencia nuevamente al momento en el cual debe expedirse el acto administrativo que se declare el incumplimiento de la obligación asegurada mediante seguro de cumplimiento manifestando que, el beneficiario del seguro, siendo la administración, además de acudir en termino frente al momento que conoce la realización del siniestro, debe acompañar la resolución administrativa que así lo declare y dentro de su vigencia, si no, se contempla la posibilidad de ejercer la acción dentro de los dos años siguientes contados desde la fecha en que tuvo conocimiento, ello, para evitar la extinción del derecho por el fenómeno de la prescripción.

#### 4. La Prescripción

Importante resulta mencionar del pronunciamiento en cita que, el acto administrativo debe dictarse en termino atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio (1971, p. 322), el cual refiere la prescripción de las acciones que se derivan del mencionado contrato de seguros, en donde uno, es el termino durante el cual se cubre el riesgo, siendo el de la duración del contrato, y otro, el que se efectúa a título de indemnización del asegurado.

El Consejo de Estado se ha referido a la prescripción como aquel fenómeno ante el cual se adquiere o se extingue un derecho, es así, una situación que acaece con el simple transcurso del tiempo acorde a las condiciones legalmente descritas para su operación en cada situación (Consejo de Estado, 2015), complementario a ello Uribe & Castillo (2015), estiman que las normas ejercen gran predominio en la delimitacion mercantil, ya sea por la voluntad del legislador o por el poder reglamentario y marcada intervencion que puede referir determinado sector de la economia, lo cual refiere una intervencion que puede afectar los principios de la economia liberal, excediendo y desnaturalizando la intervencion y el fin economico como tal, lo que nos permite anunciar a modo de apreciacion, la importancia de una debida regulacion en materia de terminos y garantias a fin de hacer clara las cargas de cada parte en la materializacion del siniestro, o no, para no generar vacios ni dudas procedimentales al momento de ejercer las acciones llamadas a desplegar en la actividad asegurable mercantil (p. 232).

Partiendo de estos conceptos y ampliando la definición de siniestro respecto del seguro de cumplimiento en lo concerniente con garantía única es importante mencionar dos premisas: i) es a partir del hecho del siniestro que surge la obligación de la aseguradora; ii) el siniestro constituye el inicio del término de prescripción extraordinaria.

En la medida en la cual se han venido presentado los diferentes siniestros en la contratación estatal y las diferentes decisiones que han tomado las aseguradoras respecto de estas reclamaciones se puede concluir que a la luz del sector asegurador la prescripción ordinaria es de carácter subjetivo pues inicia en el instante en que el asegurado tuvo conocimiento del incumplimiento y queda en firme dos años posteriores. De otro lado la prescripción extraordinaria es objetiva toda vez que nace desde el momento del siniestro muy a pesar de si se tuvo o no conocimiento de éste, el cual de acuerdo con lo reglado es de cinco años.

#### **4.1 La prescripción y el acto administrativo**

Es necesario tener en cuenta que, el seguro de cumplimiento, se ejercita a partir de la configuración de los hechos, ello quiere decir que, es oponible ante la reclamación de la misma, o que implica el siniestro, este último es necesario que ocurra dentro del espacio temporal de la vigencia del seguro, permitiendo que el conocimiento del mismo, así como la indemnización ocurran sin importar si ya terminó la vigencia del contrato de seguro (Contreras, 2017). Es por esta razón que:

“El acto administrativo es fundamental del siniestro para los sucesos de multas y caducidad, es necesario que se realice dentro de la vigencia de la póliza, ya que dentro de esta debe ocurrir el incumplimiento de la obligación contractual por parte del contratista, aún después de que el acto administrativo se produzca cuando termine la cobertura.” (Contreras, 2017 p.35).

Con el fin de establecer la relación entre la prescripción y el acto administrativo es importante retomar el alcance de la cobertura de cumplimiento pues es el amparo principal de este seguro, la entidad estatal cuenta con tres herramientas que le permiten ejercer el legítimo derecho

contractual ante un incumplimiento por parte del contratista i) declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal que estima de manera anticipada los perjuicios ii) imponer las multas como mecanismo de presión para que el contratista cumpla lo pactado en el contrato iii) de manera excepcional puede aplicar la caducidad del contrato si el incumplimiento por parte del contratista detiene la ejecución del contrato.

Estos mecanismos que puede utilizar la entidad estatal se formalizan y quedan en firme a través de la decisión de la administración plasmada en firme a través del Acto administrativo, éste le permite a la entidad hacer efectivo el seguro de cumplimiento-garantía única solicitando la indemnización por los perjuicios causados demostrando ocurrencia y tasando la cuantía de los mismos, derecho que le asiste desde la óptica del contrato de seguro como beneficiaria.

En este orden de ideas para conceptualizar el cálculo de la prescripción debemos retomar los diferentes escenarios:

- Para que opere el inicio del cálculo de la prescripción en la caducidad y las multas se requiere la declaratoria de siniestro a través del acto administrativo, pero se debe tener presente que éste debe ser notificado pues para que opere su legalidad los destinatarios deben tener conocimiento del mismo, es decir el tiempo de la prescripción se contabiliza a partir de la notificación no de la emisión del acto administrativo.
- De otra parte, el incumplimiento sin caducidad y multas que corresponde a la mera ausencia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A partir de estos dos escenarios, inicia la prescripción y la entidad estatal tiene dos años para proceder con las facultades que le son dadas por el contrato de seguro y de esta manera recibir la indemnización. Esta premisa se da única y exclusivamente cuando la administración haya tenido



conocimiento de manera inmediata a la ocurrencia del siniestro de lo contrario opera los cinco años como esta reglado que sería para los efectos prescripción extraordinaria.

## **Conclusiones**

Al haber realizado una revisión bibliográfica, en torno al cumplimiento de garantías por entidades aseguradoras, se evidencia que en ocasión a la pretensión de hacer efectivo el cumplimiento contractual en la relación obligacional de la contratación estatal, el siniestro ocurre cuando puede ser verificado plenamente su incumplimiento, haciendo alusión a que dicha verificación ocurre mediante el acto administrativo.

Por otra parte, es necesario realizar la siguiente anotación, para que ocurra el perfeccionamiento de la sanción del contratista, o se declare la caducidad del contrato estatal, debe cumplirse primero con el siguiente presupuesto, y es que, efectivamente se pueda comprobar que el contratista incumplió con sus obligaciones. Es decir, la entidad del estado no se encuentra en facultades de imponer multas y sanciones, como la de la caducidad del contrato, si mediante acto administrativo previo no ha declarado el incumplimiento del contrato por parte de este, tal como se expresó anteriormente.

Así las cosas, la configuración del siniestro se ejecuta bajo la cobertura del amparo de cumplimiento y no bajo la expedición del acto administrativo, es decir con la comprobación efectiva del incumplimiento por parte del contratista.

Por otra parte se estableció que en comparación con el derecho privado, en la contratación pública en Colombia el siniestro no se puede definir como el simple incumplimiento de un hecho sino que obligatoriamente debe ir acompañado del acto administrativo y su declaratoria de ocurrencia, es por ello que se enfatizó que las multas y la caducidad son la consecuencia de la

gravedad de los incumplimientos, en los cuales la multa no afecta el recibido a satisfacción del contrato pero la caducidad lleva implícita no solo el incumplimiento sino que se suspende la ejecución del contrato.

Así las cosas, respecto de los planteamientos realizados con ocasión a la prescripción, así como el momento en que debería ser expedido el acto administrativo para que se haga efectiva la póliza, una vez que se haya presentado un siniestro, la entidad aseguradora debe responder en su totalidad o en el pacto acordado según el contrato firmado desde un comienzo, sin poder enunciar términos distintos a los legales con el fin de no cumplir o solo cumplir de manera parcial su obligación.

Finalmente dando respuesta a la pregunta planteada es pertinente afirmar que la prescripción presenta zonas grises toda vez que en el instante en que se deja en firme el acto administrativo para hacer efectiva la póliza y la prescripción, queda sometida a la voluntad de la entidad estatal en su figura de asegurado, pues el siniestro es el acto administrativo y a través de éste se imponen multas o se declara la caducidad, así las cosas la prescripción solo nace con el siniestro y, en este entendido solo iniciaría a contar su tiempo cuando la entidad contratante a través de la administración así lo determine. Siendo lo ajustado a derecho que en el seguro de cumplimiento la prescripción debe iniciar a contarse a partir del momento en el cual se configura el incumplimiento y de esta manera aplicar la rigurosidad de lo dispuesto en la norma según el artículo 1081 del código de comercio.

## Referencias

- Alarcón, H. (2010). Contratación estatal comparada con argentina. *Novum Jus*, 4(1), 205-236.
- Angulo, L., Camacho, J. & Hoyos, C. (2015). *Las tendencias actuales de los contratos de garantía*. Bogotá, Colombia: Atelier.
- Arveláez Enríquez, P. (2006). Reticencia e inexactitud en el contrato de seguros. Tesis de pregrado). Universidad Católica, Bogotá, Colombia.
- Ayala Santamaría, A.I. (2016). Reticencia e inexactitud en el contrato de seguros. (Tesis de pregrado). Universidad Católica, Bogotá, Colombia.
- Azofra, V & Castrillo, M. (2013). *Eficiencia en ls entidades aseguradoras españolas y su estrategia competitiva: un enfoque contractual*. Madrid, España: Septem Ediciones.
- Bustamante, J & Uribe, I. (1996). *Principios jurídicos del seguro* (3 ed.). Bogotá, Colombia.
- Cajamarca, G. A. (2016). Garantías en el contrato de seguro. (F. d. jurídicas, Ed.) Bogotá, Colombia : Pontificia Universidad Javeriana.
- Cima, E. (2013). La citación en garantía del asegurador: Aspectos sustanciales y procesales. *Revista de la facultad Nueva Serie* , 4 (2), 273.
- Contreras, O. (2017). Fiscalización de la actividad aseguradora y protección del consumidor. Santiago de Chile, Chile: Comité Ibero-Latinamericano de seguros.
- Contreras, O. (2019). Fiscalización de la actividad aseguradora y protección del consumidor. *Revista Chilena de Derecho Privado*, (9).

- Corral, H. (2015). La interposición de la acción directa implícita del tercero perjudicado en contra del nuevo régimen de seguros. *Revista Chilena de derecho* , 42 (2), 397.
- Currea, A. (1966). *Introducción al estudio y practica del seguro*. (primera ed.). Ediciones tercer mundo.
- Donati, A. (1993). “Trattato del Diritto delle Assicurazioni Private” Vol I. Milán, Giuffré, página 55. Citado por Lopez, H. “Comentarios al Contrato de Seguros” Edición Segunda, Bogotá, Dupré Editores.
- García Vásquez, D. F. (2016). Garantías independientes y cartas de patrocinio: las mejores alternativas para el comercio internacional. *Mercatoria* , 5 (1), 20.
- García, I. (2013). Aproximación a la última etapa del mercado único asegurador, y su incidencia en el derecho. *Revista de Derecho ecomunitario Esuropeo* , 7 (16), 1177.
- Gómez Gómez, F. (2017). Naturaleza jurídica y modalidades del seguro de cumplimiento. (Tesis de pregrado). Universidad Catolica, Bogotá, Colombia.
- Gómez, F. (2011). Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de cnsumo: una perspectiva económica. Barcelona, España: indret.
- Gonzalez, A. (2015). Garantía de la nación para riesgos políticos y extraordinarios para seguro de crédito a la exportación de mediano y largo plazo. [Tesis]Bogotá, Colombia: Pontificia universidad Javeriana.
- González, N & Suarez, E. (2013). Análisis económico y financieo del sector asegurador.

Londoño, N., Giraldo, J & Hincapié, J. (2014). Análisis jurisprudencial en materia de acción directa y Ilmamiento en garantia a las compañías de seguros. (F. d. derecho, Ed.) Colombia: Universidad Javeriana.

Martínez Luna, R. (2005). Naturaleza y régimen jurídico del contrato de seguro de cumplimiento en Colombia. (Tesis de pregrado). Universidad Católica, Bogotá, Colombia.

Montoro, L. (2014). Seguros de protección de pagos: una garantía limitada ante situaciones de fallecimiento, desempleo o incapacidad temporal. *Revista CESCO del derecho de consumo* (10), 38-42.

Narvaez, J. (2015). El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario. *Revista Ibero-Latinoamericana de seguro*, 24, 49-102. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris43.csaf>

Najera, A., & Durán, V. (2017). Estadísticas del sector asegurador. Obtenido de Fasecolda: <https://fasecolda.com/index.php/fasecolda/estadisticas-del-sector/>

Ocaña, D. (2015). La ejecución de garantías y el arbitraje en la aseguradora del sur sucursal Ambato. Ambato, Ecuador: Universidad de ambato.

Ortega, L. (2018). *El acto administrativo en los procesos y procedimientos*. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.

Penagos, A. (2005). El seguro de cumplimiento en la contratación administrativa. [Tesis de grado]. Universidad Pontificia Javeriana. Recuperado en <https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere7/DEFINITIVA/TESIS%2056.pdf>

Rodas, P. (2016). El contrato de seguro y la actividad aseguradora en Brasil. *Actualidad jurídica Iberoamericana*, 1 (5), 37.

Rossi, L. (2003). *Seguros de garantía*. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

Rodríguez, D. C. El contrato de seguro. Facultad de Derecho, 1.

Superintendencia financiera de Colombia. (8 de Noviembre de 2019). Doctrinas y conceptos financieros. Obtenido de [superintendenciafinanciera.gov.co](https://www.superfinanciera.gov.co):

<https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/18372/dPrint/1/c/00>

Tamayo Neira, R. (2007). Ejecutividad del contrato de seguros. Tesis de pregrado). Universidad Católica, Bogotá, Colombia.

Uribe Piedrahita, C. A., & Castillo Cadena, F. (2015). El otorgamiento de garantías en el derecho de la libre competencia (un análisis jurídico y económico). *Vniversitas* (110), 225-284.

Vigil Duarte, A. (2008). La acción directa del tercero perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil. *RIS*, 28 (17), 45.

### **Fuentes Jurisprudenciales**

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia T- 2013-00003 M.P. Danilo Rojas Betancourth. Bogotá, D.C., marzo veintisiete (27) de dos mil catorce (2014).

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia T- 21432. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Bogotá, D.C., agosto diecinueve (19) de dos mil nueve (2009).

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia - Rad. 05001-23-26-000-1990-00842-01(17322).

C.P. Enrique Gil Botero. Bogotá. D.C., abril catorce (14) de dos mil diez (2010).

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia No. 25000-23-26-000-2001-02301-01(29857).

M.P. Danilo Rojas Betancourth. Bogotá, D.C., marzo veintisiete (27) de dos mil catorce (2014).

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, exp 4045. (1994). Sentencia del 24 de enero de 1994. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional. Sección Tercera. Sentencia T-7757. M.P. Juan de Dios Montes

Hernández. Septiembre veinte (20) de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Corte Constitucional. Sección Tercera. Sentencia T-00457-01M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

Bogotá, D.C., abril veintidós (22) de dos mil nueve (2009).

Corte Constitucional. Sección Tercera. Sentencia T-10264. M.P. Ricardo Hoyos Duque. Bogotá,

D.C., septiembre trece (13) de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Corte Constitucional. Sección Tercera. Sentencia T-11318. M.P. Jesús María Carillo Ballesteros.

Bogotá, D.C., agosto veinticuatro (24) de dos mil (2000).

Corte Constitucional. Sección Tercera. Sentencia T-5931. M.P. Carlos Alberto Betancourt.

Bogotá, D.C., mayo seis (6) de mil novecientos noventa y dos (1992).

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia No. 2007-00071. M.P. Fernando

Giraldo Gutiérrez. Bogotá, D.C., diciembre dieciocho (18) de dos mil doce (2012).

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia T-5670. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Bogotá, D.C., febrero dos (2) de dos mil uno (2001).

### **Fuentes Legislativas (Colombia)**

Código Civil de Colombia. (1987). Arts. 1496 y 1501. Recuperado en

<https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/codigocivilcolombiano1887.pdf>

Código de Comercio. (Sección Primera). Libro II. De los contratos especiales de Comercio. En: título viii. De los contratos de seguros. Colombia.

Código de Comercio. (1971). Arts. 1036, 1142, 1045, 1054, 1069, 1061, 1054, 1081 (27 de Marzo de 1971). Decreto 410. Bogotá, Colombia. Recuperado en

[https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=41102](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=41102)

Congreso de la Republica. (16 de Julio de 2017). Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con servicios públicos. Bogotá, Colombia: Diario Oficial 46.691.

Congreso de la República. (Octubre 28 de 1993). Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Colombia.

Congreso de la República. (18 de enero de 2011). Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Colombia.

Congreso de la República. (14 de junio de 2011). Ley 1450 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Colombia.



Congreso de la República. (12 de julio de 2011). Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública. Colombia.

Decreto Ley 663, (1993) (testimony of Presidencia de la República). <http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1142040>

Decreto 4828, (2008) (testimony of Presidencia de la República).  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34389>

Decreto 0734, (2012) (testimony of Presidencia de la República).  
[https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto\\_0734\\_2012.htm#5.1.13](https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0734_2012.htm#5.1.13)

Decreto 1510, (2013) (testimony of Presidencia de la República).  
[https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto\\_1510\\_2013.htm#163](https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1510_2013.htm#163)

Decreto 1082, (2015) (testimony of Presidencia de la República).  
<https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx>

Decreto 410 de 1971. Libro Cuarto, Título V - del Contrato de seguro,, Capítulo I, Principios comunes a los seguros terrestres (Código de Comercio 27 de marzo de 1971).